

PROESS

Programa de
Economía Social Solidaria



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA



Comisión Institucional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

Pronunciamento de respaldo a la movilización ciudadana por la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional de nuestro país

La Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UCR (CISAN) de la Rectoría y el Programa de Economía Social Solidaria (PROESS) de la Escuela de Sociología son dos instancias de la Universidad de Costa Rica que coinciden en priorizar su trabajo con organizaciones de personas productoras de alimentos en nuestro país, principalmente con personas campesinas y en fomentar vínculos cercanos entre quienes producen y quienes consumen en los territorios.

La Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) tiene dentro de sus objetivos prioritarios el estimular procesos de articulación e integración Universidad - Sociedad que inciden en el mejoramiento de la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en aquellos grupos de atención prioritaria.

El Programa de Economía Social Solidaria (PROESS) tiene como objetivo general “Promover el desarrollo de la Economía Social Solidaria en Costa Rica por medio de la vinculación de la docencia, la investigación y la acción social en alianza con organizaciones, instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales para aportar al fortalecimiento y la construcción de culturas socioeconómicas caracterizadas por la democracia, el compromiso, la solidaridad, la innovación, la equidad y la justicia”.

Desde la CISAN-UCR y el PROESS, vemos con gran preocupación cómo, desde hace ya varios años, pero en especial en estos momentos críticos que atraviesa el agro costarricense, las personas productoras de alimentos para el consumo interno en nuestro país, principalmente las familias campesinas, han visto afectadas sus economías familiares, y en general sus modos de vida, como consecuencia del abandono de estos sectores y del vacío de políticas públicas adecuadas para el sector, que atiendan y respondan a sus verdaderas necesidades.

Como consecuencia de dicho abandono y desprotección, producto de la ausencia de una política de Estado que procure el verdadero desarrollo y sostenibilidad del agro costarricense, no se ha procurado el avance hacia sistemas alimentarios sostenibles, que permitan los encadenamientos, los mecanismos de comercio justo, la asociatividad productiva y de consumo en los territorios, a nivel local y nacional, y que permitan tanto la existencia de una base productiva segura para la población costarricense, como las

posibilidades de acceso a un nivel de vida digno para las personas productoras y las familias campesinas de Costa Rica.

Por la situación señalada, apoyamos la movilización ciudadana por la Seguridad y Soberanía Alimentaria de nuestro país y marcharemos este Miércoles 29 de Marzo de 2023, junto a las diversas organizaciones del agro costarricense, y de otros sectores, considerando que:

1. El informe de la Contraloría, así como los informes del sector agropecuario (elaborados por SEPSA), muestran que las áreas de siembra de alimentos de primera necesidad, como el arroz y los frijoles, se están reduciendo continuamente (ej para el arroz en 1997: 70 000 hectáreas a 2017: 20 000 hectáreas), por la principal razón de las políticas de liberación de su comercio (TLCs), favoreciendo su importación, dejando la distribución y comercialización de éstos en muy pocas manos (oligopsonios), afectando tanto a las familias productoras como a las consumidoras. Esto ha debilitado nuestra Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional.

2. La ciudadanía tiene derecho a una alimentación adecuada, saludable y sostenible y a precios justos, aspectos que se ven amenazados por la dependencia de alimentos importados que desestimulan la agrobiodiversidad dentro del territorio costarricense, privilegiando además las largas cadenas de comercialización que representan un retroceso en las propuestas ambientales de descarbonización y calidad de vida.

3. Los sistemas alimentarios saludables y sostenibles valoran la proximidad entre personas consumidoras y productoras, dando énfasis a la construcción social de mercados, los programas de abastecimiento institucional y las propuestas de mercados o centros de abastecimiento regional que requieren del apoyo institucional, para continuar aportando identidad desde una perspectiva de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional a partir de los alimentos de origen nacional y territorial. Pero desde hace décadas se han venido debilitando los mecanismos que favorecen el desarrollo de los mercados locales y nacionales para las organizaciones de productores y productoras y para las familias campesinas, con condiciones de pago del Programa de Abastecimiento Institucional de meses posterior a la entrega del producto, lo cuál es imposible de sostener a menos de tener un capital importante para esperar el pago. El debilitamiento del Consejo Nacional de la Producción, su no exclusión de la regla fiscal y la intención de abrir el acceso al Programa de Abastecimiento Institucional a productos importados son tres ejemplos de este debilitamiento.

4. Se ha invisibilizado el importantísimo aporte de las mujeres campesinas a la producción de alimentos para el consumo interno y para la seguridad alimentaria de sus propias familias y comunidades, limitando sus posibilidades de acceder a tierra, a crédito, a capacitación. Esto ha dado como resultado que los hogares con jefas mujeres, en especial de las zonas rurales, presenten mayores y más profundos índices de inseguridad alimentaria.

5. La exclusión social del sector rural que provoca la pérdida de la capacidad de producción del país conlleva a la marginalidad tanto por las opciones laborales alternativas (empleo precario e informal) en el sector rural como en la GAM, ejerciendo más presión por los servicios sociales del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y demás instituciones de

servicio social como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), entre otras. Es inconcebible que las mayores cifras de pobreza y de inseguridad alimentaria se encuentren en las zonas rurales de nuestro país.

6. Es necesario salvaguardar nuestra soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, sobre todo en el contexto en el que vivimos, caracterizado por amenazas externas y situaciones internacionales que afectan las largas cadenas agroalimentarias, de las cuales no existe un control más que el dictado por el mercado dominante. Esto tiene un impacto importante en la calidad de vida de las personas, afectando el desarrollo humano a partir de una serie de eventos que atentan contra la inseguridad alimentaria, las economías locales y familiares y el bienestar de las personas. Por su parte, no existen políticas nacionales que fomenten las cadenas alimentarias cortas de proximidad, que permiten una importante conexión entre familias productoras y consumidoras en sus territorios.

7. La desprotección estructural que afecta al agro costarricense, especialmente a las personas campesinas y pequeñas y medianas productoras, lo coloca en una posición absolutamente desventajosa para participar en un tratado de libre comercio o afrontar sus consecuencias, máxime si los sectores agropecuarios de los otros países participantes gozan de situaciones muy diferentes y ventajosas, y además provienen de países con una extensión de tierra que supera por mucho la nuestra. Ya estamos enfrentando las consecuencias del TLC con los Estados Unidos (dumping sumado a la eliminación de aranceles), y un tratado más, en esta situación de indefensión y de ausencia de una política de Estado que defina qué queremos y cómo queremos el desarrollo del agro costarricense, nos vendría a colocar en una situación de gran vulnerabilidad, tanto a las personas que producen alimentos, como a las personas consumidoras. Por eso no apoyamos el ingreso de Costa Rica en el Tratado de la Alianza del Pacífico.

Ante esta situación, nos unimos a la solicitud de los sectores campesinos de convocar a una Comisión Mixta Especial en la Asamblea Legislativa para elaborar una política de Estado con su respectivo plan de implementación para garantizar la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de nuestra población, y nos ponemos a disposición para cualquier colaboración que podamos brindar en el marco de nuestras áreas de trabajo.